Andrea Desirée Rabanales de la Roca* (Guatemala)

El margen de apreciación ante casos de desacuerdo razonable. Mecanismo dialógico entre la Corte IDH y los tribunales constitucionales

RESUMEN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de su competencia contenciosa, ha llevado a que la interacción de esta con los Estados (específicamente con sus órganos jurisdiccionales de cierre) sea poco dialógica. Lo anterior se justificaba por la naturaleza de los asuntos que conocía; no obstante, cada vez son más los casos de conceptos esencialmente controvertidos. Ante ello se plantea la posibilidad de aplicar el margen de apreciación como mecanismo de armonización y aproximación dialógica frente a casos de desacuerdo razonable.

Palabras clave: margen de apreciación, diálogo jurisprudencial, desacuerdo razonable.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte zeichnet sich bei der Ausübung seiner gerichtlichen Kompetenzen im Umgang mit den Staaten (insbesondere mit deren letztinstanzlichen Gerichten) durch fehlenden Dialog aus. Dieses Fehlen wurde bisher mit der Natur der verhandelten Gegenstände begründet; mittlerweile sind jedoch zunehmend Rechtsbegriffe im Kern umstritten. Einen Ausweg aus dieser Situation könnte das Konzept des Wertungsspielraums als Mechanismus der dialogbasierten Harmonisierung und Annäherung bei begründeten Kontroversen bieten.

Schlagwörter: Wertungsspielraum, Rechtsprechungsdialog, begründete Kontroverse.

* Magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España); magíster en Bioética de la Universidad del Istmo (Guatemala); abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos (Guatemala). Asesora del Proyecto Seguridad y Justicia/Usaid; profesora universitaria de pregrado y posgrado. andrea.rabanales@gmail.com

ABSTRACT

In the exercise of its contentious jurisdiction, the interaction of the Inter-American Court of Human Rights with the States (specifically with their high courts) is not very dialogic. This was justified by the nature of the matters over which it presided. Nevertheless, more and more cases involve essentially controversial concepts. This article raises the possibility of applying the margin of appreciation as a mechanism of harmonization and dialogic approach in cases of reasonable disagreement.

Key words: Margin of appreciation, jurisprudential dialogue, reasonable disagreement.

Introducción

Desde hace algunas décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha jugado un papel trascendental en la protección y defensa de los derechos humanos en el continente americano; ello, además de ser un aporte vital para la protección de la dignidad de las personas, ha implicado que se produzcan, con cada vez mayor regularidad, interacciones entre ese tribunal supranacional y los Estados sometidos a su jurisdicción, sus órganos jurisdiccionales y, específicamente, las salas o tribunales constitucionales.

Dada la magnitud de las vulneraciones de los derechos humanos que acontecían en el continente y, como consecuencia de que muchos de los países americanos estaban bajo dictaduras, la Corte IDH optó por que la interacción que naturalmente se produce en todo sistema de tutela multinivel de derechos humanos se diera en términos poco dialógicos. En su momento, esa aproximación tuvo su justificación en la situación mencionada; no obstante, con el paso del tiempo, a la Corte IDH llegan casos que incorporan materias de desacuerdo razonable; además, paulatinamente las democracias en el continente se han ido fortaleciendo, lo que hace surgir el interrogante de si aún tiene sentido la posición inicial de la Corte IDH o si sería idóneo procurar una aproximación dialógica y armonizadora.

En ese sentido, en el presente artículo se esbozan algunas ideas en torno a la posibilidad de incorporar en la Corte IDH, ante casos de desacuerdo razonable, el margen de apreciación.

1. Herramientas jurisprudenciales. Control de convencionalidad y *res interpretata*

Con miras a consagrar su función contenciosa y a optimizar los resultados en el continente americano, la Corte IDH ha incorporado jurisprudencialmente diversas herramientas de tal trascendencia que han venido a modular y definir, en gran medida, el funcionamiento del tribunal de marras. Dentro de estas herramientas es preciso destacar el control de convencionalidad y la *res interpretata*.

El control de convencionalidad ha sido establecido jurisprudencialmente por la Corte IDH como una obligación derivada del propio tratado e implica que, con o sin determinación concreta de carácter constitucional del valor o la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, estos constituyen parámetro de validez y enjuiciamiento para los jueces ordinarios y constitucionales y conforman lo que se conoce como bloque de constitucionalidad en los Estados.¹

Acosta Alvarado estima que el control de convencionalidad es

... la figura gracias a la cual los jueces estudian la compatibilidad de una norma nacional con las disposiciones interamericanas [...] este examen le corresponde primariamente a la propia Corte IDH (control concentrado). No obstante, según los más recientes avances jurisprudenciales, su ejercicio también les compete a los jueces nacionales que ejercen control de constitucionalidad o, en general, a cualquier funcionario judicial (control difuso).²

Esto significa que, de acuerdo con la Corte IDH, en los países que han reconocido su jurisdicción, los intérpretes nacionales no pueden arrogarse la interpretación última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), pues esta compete a ese tribunal supranacional. Además, los jueces nacionales se han convertido también en jueces del sistema interamericano, puesto que deben efectuar el control de convencionalidad.

El control de convencionalidad se ha convertido en herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos en América; constituye una herramienta para que autoridades y operadores de los Estados implementen en forma directa la jurisprudencia de la Corte IDH y adecuen la legislación interna y, en general, el rumbo jurídico y político del Estado de conformidad con los criterios y estándares desarrollados en las sentencias de la Corte IDH.

De Figueiredo Caldas afirma: “En esencia, a través de esta doctrina, que supone uno de los más innovadores esfuerzos llevados a cabo por la Corte IDH, se busca

¹ Respecto a los orígenes jurisprudenciales del control de convencionalidad en la Corte IDH, Canosa consigna: “Unos argumentos que comenzó a exponer el juez mexicano de la Corte, Sergio García Ramírez (voto concurrente en el Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, de 25 de noviembre de 2003), y que asumió la mayoría en el célebre Caso Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile, de 26 de septiembre de 2006 [...] en una sentencia posterior (Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, de 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128) se acabó, sin más, hablando del ‘control de convencionalidad’ que debían desarrollar los jueces nacionales ‘evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes” (Raúl Canosa, *El control de convencionalidad*, Pamplona, Thomson Reuters, 2015, pp. 29-30).

² Paola Andrea Acosta, *Diálogo judicial y constitucionalismo multinivel. El caso interamericano*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 71.

incrementar la efectiva aplicación de estándares mínimos en materia de derechos humanos del SIDH en los ordenamientos jurídicos nacionales”.³

Acosta Alvarado acota que es la Corte IDH la que ha desarrollado esta figura,⁴ no para referirse al trabajo que esta adelantará, sino para bautizar el control que deben ejercer autoridades nacionales con miras a evitar el uso de normas contrarias al sistema; indica también que según la propia Corte IDH el fundamento de esta figura radica primordialmente en las obligaciones generales de reconocimiento, respeto y adaptación que compelen a los Estados para que todo su andamiaje normativo e institucional esté acorde con la Convención, por lo que el Estado debe asegurarse de expulsar de su ordenamiento las normas incompatibles con el sistema interamericano.⁵

De lo anterior se colige que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todas las autoridades de un Estado, el cual consiste en efectuar una interpretación conforme, entre las leyes nacionales (también políticas y programas) y los estándares interamericanos de protección de derechos humanos fijados por la Corte IDH tanto en su función contenciosa como en su función consultiva, de tal manera que sea factible inaplicar aquellas disposiciones (sin importar su jerarquía dentro del ordenamiento interno) que contravengan los estándares mencionados.

Como complemento del desarrollo del control de convencionalidad, también se ha establecido jurisprudencialmente que la interpretación convencional plasmada por la Corte IDH al proferir sus sentencias es de obligatorio cumplimiento, tanto para las partes en el asunto como para el resto de Estados parte.

Los efectos de una sentencia de la Corte IDH se despliegan en dos direcciones: “a) de manera subjetiva y directa hacia las partes en la controversia internacional [*res iudicata*]; b) de manera objetiva e indirecta hacia todos los Estados parte en la Convención Americana [*res interpretata*]”.⁶

El segundo supuesto produce eficacia *erga omnes* hacia todos los Estados parte de la Convención. Todas las autoridades nacionales quedan vinculadas a la efectividad convencional y al criterio interpretativo establecido por la Corte IDH. La eficacia subjetiva implica la obligación del Estado de cumplir con la totalidad de la sentencia y no únicamente con la parte dispositiva del fallo. Por su parte, el primer supuesto relativo a la eficacia objetiva “consiste en la obligación por todas las autoridades nacionales de aplicar no solo la norma convencional, sino la norma convencional

³ Roberto de Figueiredo, “Estructura y funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos: sus herramientas para un efectivo diálogo judicial”, en Alejandro Saiz (dir.), *Diálogos judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 50.

⁴ El primer caso en que aquel tribunal desarrolló concretamente el control de convencionalidad fue en *Almonacid Arellano vs. Chile*.

⁵ Acosta, *op. cit.*, pp. 73-76.

⁶ Voto razonado del juez Eduardo Ferrer a la resolución de la CIDH de 20 de marzo de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso *Gelman vs. Uruguay*, párrafos 31-33.

interpretada (*res interpretata*)⁷. Esta eficacia interpretativa tiene como aspiración lograr una efectividad regional mínima de la CADH que, tal como se ha determinado jurisprudencialmente, abarca medidas legislativas y de cualquier otro carácter necesarias para hacer efectivos los mencionados estándares.

Como consecuencia, tanto del control de convencionalidad como de la *res interpretata*, el entendimiento que los Estados tienen en su ordenamiento jurídico interno de los derechos humanos se ve condicionado; esto es debido a que la interpretación que la Corte IDH efectúe de ciertos derechos acaba necesariamente convirtiéndose en la interpretación que debe tener cada Estado respecto de los derechos que incorpora su ordenamiento jurídico, incluso aquellos establecidos por su constitución.

De ahí que se produce en el derecho interno una reestructuración de la comprensión de los derechos fundamentales que podría conllevar, en ciertos casos, discrepancias respecto a la forma como se conciben los mismos en un Estado determinado o incluso, puede implicar la incompatibilidad entre las normas del ordenamiento jurídico de un Estado y la interpretación de las normas convencionales atinentes, efectuada por la Corte IDH.

2. Colisión entre la Corte IDH y los Estados sometidos a su jurisdicción contenciosa

El control que efectúa la Corte IDH tiene su razón de ser en la coexistencia de ordenamientos entre los que no existe prevalencia de uno sobre el otro, sino más bien interacciones mutuas que necesariamente acontecen dentro de la dinámica de tutela multinivel de derechos humanos, puesto que en este caso las materias de competencia de los distintos niveles son susceptibles de superponerse.⁸

La interacción mencionada debería ser valorada positivamente e incluso deseada, pues un andamiaje que opera en favor de la protección de derechos fundamentales a distintos niveles puede ser más efectivo en el cumplimiento de sus objetivos y fines; no obstante, esta interacción acarrea algunas dificultades.

⁷ *Ibid.*, párrafo 43.

⁸ Ferrer, al analizar tanto a la Corte IDH como a los órganos encargados de la interpretación constitucional en el ámbito interno, advierte que su composición orgánica, en ambos casos, está integrada por jueces independientes, cuyos miembros no son numerosos y son nombrados por un periodo más o menos largo; en cuanto a sus funciones señala que: “sobre todo la contenciosa, el objetivo esencial consiste en la interpretación y aplicación de la Convención Americana como una especie de *lex superior* conteniendo un *bill of rights* transnacional, teniendo sus resoluciones efectos vinculantes con los Estados que reconozcan su jurisdicción siendo inapelables. Se realiza, en parangón con la jurisdicción constitucional interna, la interpretación conforme o disconforme a la convención de la normativa nacional, constituyendo una fuerte de derecho en la materia” (Eduardo Ferrer, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete constitucional (dimensión transnacional del derecho procesal constitucional)”, *Revista de Derecho Constitucional*, 2002, pp. 258-259).

En todos los tipos de norma susceptibles de controlarse, independientemente de su jerarquía dentro de los Estados, se pueden producir discrepancias entre la forma en que se conciben los derechos en un Estado, la forma en que estos se encuentran plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación de las normas convencionales atinentes efectuada por la Corte IDH.

Los intérpretes supremos de las constituciones en los Estados parte se ven compelidos a que su interpretación de los derechos humanos sea acorde con lo previsto en tratados internacionales en la materia (dentro de ellos evidentemente la CADH); pero, además, al tener noticia de las decisiones adoptadas por la Corte IDH, se les exige que su interpretación de los derechos humanos sea acorde también con lo determinado por ese tribunal supranacional. Consecuentemente, la forma en la que puede resolver los asuntos sometidos a su consideración se condiciona. Esto puede producir una confrontación entre la Corte IDH y los tribunales constitucionales nacionales, por ser estos los actores encargados de determinar jurídicamente el contenido y los límites de la constitución y de los derechos humanos contenidos en ella.⁹

3. Forma de abordar el choque y su justificación

El mecanismo o la forma mediante la cual la Corte IDH ha abordado el choque mencionado, es que debe prevalecer lo determinado por el tribunal supranacional.

La dinámica poco dialógica se explica y justifica en la considerable gravedad de los asuntos que la Corte IDH ha tenido que resolver a lo largo de sus años de funcionamiento. Verbigracia, causas relacionadas con desapariciones forzadas, genocidios, ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y, en general, de graves violaciones de derechos fundamentales, donde la condena al Estado resultaba clara y hasta necesaria.¹⁰

En estos casos, la Corte IDH ha jugado un papel trascendental en la defensa de los derechos humanos, posicionándose muchas veces como protagonista de su protección en el continente. Además, en innumerables ocasiones ha sido promotora de reparaciones a las víctimas, ha liderado procesos en pro del esclarecimiento de la verdad y ha fomentado cambios estructurales dentro de los Estados para que estos sean respetuosos de los derechos humanos.

⁹ No es irrelevante destacar que la totalidad de los países sometidos a la jurisdicción de la Corte IDH cuentan con constituciones cuya parte dogmática incluye un amplio desarrollo en materia de derechos humanos.

¹⁰ Véanse, entre otros, Corte IDH, Hilaire, Constantine y otros *vs.* Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 94; Corte IDH, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Goiburú y otros *vs.* Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 153; Corte IDH, Masacre de Mapiripán *vs.* Colombia, Sentencia de 11 de marzo de 2005, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 134.

Sin embargo, con cada vez más regularidad, llegan a la Corte IDH casos que en lugar de ser evidentes y grandes violaciones de derechos humanos, se trata de materias donde existe desacuerdo respecto al contenido, alcance, límites y precisiones de los derechos, o incluso donde hay indeterminación respecto a qué se debe estimar como vulneración o protección de un derecho humano.

Que se sometan a consideración de la Corte IDH (y en general de los tribunales que protegen derechos humanos tanto en el ámbito interno como en el supranacional) problemáticas donde no existe consenso respecto a elementos fundamentales de los derechos humanos deriva del hecho de que el desacuerdo impera en muchas discusiones jurídicas, políticas y éticas de la actualidad. Es la interacción social y el desarrollo de relaciones complejas en el mundo actual los que hacen surgir problemáticas de esta índole; por poner solo algunos ejemplos, se pueden destacar las controversias actuales y la indeterminación en torno a temas tales como la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión, la libertad de religión, la diversidad etnocultural y el respeto de sus tradiciones, etcétera.

En ese orden de ideas, Juan Carlos Bayón afirma que “cuando puede haber desacuerdos razonables acerca de qué constituye una transgresión de los límites y vínculos que la constitución establece (y por tanto divergencias de opinión acerca de cuál es la *veritas*), la decisión última al respecto ha de ser puesta inexorablemente en las manos de alguien”;¹¹ ese alguien en muchas ocasiones resulta ser la Corte IDH.¹²

¹¹ Juan Carlos Bayón, “El constitucionalismo en la esfera pública global”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXIX, 2013, p. 66.

¹² En su artículo “El constitucionalismo en la esfera pública global”, Juan Carlos Bayón critica cómo Luigi Ferrajoli propone dos “principios para la distribución en la esfera global de la autoridad para decidir sobre el contenido y alcance de los derechos”: la subsidiariedad y el “nivel de protección más alto”. Respecto a la subsidiariedad, Ferrajoli la presenta como “un principio constructivo para distribuir y delimitar la autoridad legítima entre las esferas nacional y supranacional, partiendo de una presunción a favor de la esfera nacional”. Al respecto, el autor indica que formulado en esos términos, el principio resulta vacío, pues se apoya en la existencia de un nivel óptimo para la toma de cada tipo de decisión pero se limita a indicar que la decisión debe tomarse en el nivel apropiado y que este resulta ser el inferior en todos los casos en que no sea apropiado el superior. “Ferrajoli sostiene que, en aplicación de la idea de subsidiariedad, cuando los Estados violen los derechos fundamentales o sean ‘estructuralmente impotentes para garantizarlos’ su garantía debe quedar confiada a instituciones supranacionales. Pero el problema, claro está, es que cuando hay desacuerdo acerca del contenido y alcance de nuestros derechos es controvertido qué cuenta o no como violación de los mismos”. Respecto al “nivel de protección más alto” afirma que “todo derecho tiene un alcance justificado y que extenderlo más allá de ese punto no representa una protección mayor, sino una protección indebida”. De tal manera, Bayón concluye que “la fuente de nuestros problemas es la existencia de desacuerdos entre los distintos niveles de decisión acerca de cuál es la protección correcta de los derechos; y por eso, justamente, la adopción como regla de colisión entre ordenamientos concurrentes del principio del nivel de protección más alto no está en condiciones de asegurar, por sí sola, el grado de coherencia y unidad que requiere un pluralismo ordenado como forma de articular una democracia constitucional multinivel” (*ibid.*, pp. 88-93).

Con cada vez mayor regularidad, la presencia de materias de desacuerdo razonable sometidas a consideración de la Corte IDH incrementa la posibilidad de choque entre lo considerado por el mencionado tribunal supranacional en cuanto a límites, alcances y comprensión de los derechos humanos, y lo que al respecto determina el ordenamiento interno de los Estados sometidos a la jurisdicción de la Corte IDH.

En consecuencia, la estructura y dinámica en que ejerce sus funciones la Corte IDH, aunada al conocimiento de casos de materias donde es susceptible el desacuerdo, es el ambiente preciso para que se produzcan choques entre lo resuelto por la Corte IDH y lo establecido en los ordenamientos de los Estados, confrontación que es especialmente relevante cuando el conflicto enfrenta una sentencia del tribunal supranacional y el desarrollo constitucional de un derecho.

4. Derechos controvertidos y dinámica de la Corte IDH como catalizadores de la búsqueda de una nueva aproximación

Algunos son ya los casos conocidos por la Corte IDH que versan sobre materias de desacuerdo respecto al sentido, significado o alcance de los derechos humanos; y también, varios son aquellos en donde el choque entre lo resuelto por esta y el ordenamiento jurídico de los Estados se confronta producto de la dinámica y estructura propia en que ejerce sus funciones la Corte aludida.¹³

Como se consignó, la dinámica poco dialógica en que, en la mayoría de casos, la Corte IDH ha abordado el choque mencionado, se justificaba porque los casos conocidos por este tribunal resultaban, en la mayoría de casos, grandes y evidentes violaciones de derechos humanos; no obstante, ello ha cambiado con la paulatina aparición de problemáticas complejas, tal como se constató en el apartado anterior. Entonces, si se estima que una de las razones primordiales para sustentar la estructura poco dialógica de la Corte IDH ha sido la necesidad de efectuar pronunciamientos contundentes debido a la magnitud de las violaciones de derechos fundamentales presentes en los casos que debía resolver, se justificaría que ante la aparición de eventos respecto a materias discutibles se optara por una aproximación dialógica.

En escenarios tan plurales como el que existe entre los Estados sometidos a la jurisdicción de la Corte IDH, con un pluralismo jurídico tan marcado, es factible que no haya unidad de interpretación en cuanto al sentido, significado y alcance de los derechos fundamentales. Como anota Bustos Gisbert:

¹³ Por ejemplo, Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 73; Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Fondo y Reparaciones, Serie C, núm. 221, párr. 238; Corte IDH, Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación *in vitro*”) vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 257.

Lo característico de las situaciones de pluralismo descritas es que ya no puede existir, por definición, una instancia última de solución de controversias jurídicas [...]. Existirán tantas instancias como ordenamientos constitucionales estén siendo aplicados simultáneamente [...]. En tales casos, apunta Poiares Maduro, existe un contexto de conflicto potencial entre distintos ordenamientos constitucionales que ha de resolverse de manera no jerárquica.¹⁴

La aproximación para abordar el choque entre lo determinado en las sentencias de la Corte IDH y el ordenamiento jurídico interno de un Estado (en especial el preceptuado en el texto supremo) debería buscarse mediante la reestructuración del esquema bajo el que opera el alto tribunal; específicamente, la forma como se relaciona e interactúa este con los órganos de cierre del sistema jurídico de los respectivos Estados. La reestructuración mencionada debe propender a la comunicación o al diálogo judicial, tal como consigna Bustos Gisbert, no solo para la búsqueda de soluciones, sino también para garantizar la convivencia, tratando de evitar bloqueos por incompatibilidad.¹⁵

5. Aproximación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al choque en materia de derechos humanos entre sus decisiones y el ordenamiento jurídico de los Estados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha optado por abordar las posibles confrontaciones entre lo que resuelve y lo preceptuado en el ordenamiento interno de los Estados sometidos a su jurisdicción mediante la utilización de distintos mecanismos dialógicos.

El diálogo judicial se concibe como un acto de comunicación entre tribunales donde estos “se reconocen, mutuamente, legitimidad el uno al otro, pero sin que se afirme la supremacía de uno sobre otro”.¹⁶ El diálogo llevado a cabo por el TEDH se ha desarrollado abandonando la idea de primacía irrestricta del tribunal supranacional; lo anterior, principalmente por dos razones: en primer lugar, por el respeto y reconocimiento del papel de los tribunales nacionales como actores que protegen derechos humanos; en segundo lugar, por los efectos interpretativos de sus sentencias.¹⁷

¹⁴ Rafael Bustos, “XV proposiciones generales para una teoría de los diálogos judiciales”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 49, 2012, p. 22.

¹⁵ *Ibid.*, p. 18.

¹⁶ Rafael Bustos, *Pluralismo constitucional y diálogo jurisprudencial*, México, Porrúa, 2012, p. 21.

¹⁷ Que distan de los efectos de las sentencias proferidas por la Corte IDH donde indiscutiblemente opera el control de convencionalidad y la *res interpretata*.

Con relación al reconocimiento de la legitimidad de los tribunales nacionales como actores valiosos en la tutela multinivel de derechos humanos, Bustos Gisbert afirma que la intensidad del diálogo establecido va a depender en gran medida del grado de reconocimiento del otro tribunal como un interlocutor válido.¹⁸ El TEDH, en la mayoría de los casos, reconoce a los órganos de cierre de los Estados sometidos a su jurisdicción como sus aliados en la protección multinivel de derechos humanos y ello propende a que confíe en las decisiones que estos adoptan en asuntos sometidos a su conocimiento.

En cuanto a los efectos interpretativos de las sentencias del TEDH, es dable consignar que si bien la doctrina actual reconoce que las sentencias del TEDH “generan efectos más allá de la cosa juzgada, que repercuten tanto en el Estado implicado respecto de un asunto concreto como en terceros Estados parte en situaciones similares”,¹⁹ no hay acuerdo sobre el nivel de vinculatoriedad de los efectos interpretativos de las mismas;²⁰ de ahí que el hecho de que no se tengan determinados con certeza los efectos interpretativos de las sentencias del TEDH ha facilitado que no se adopten relaciones verticales y poco dialógicas entre el TEDH y los tribunales jurisdiccionales de los Estados europeos sometidos a su competencia.

Bustos Gisbert sostiene que “puede apreciarse la aparición de nuevas y específicas normas procesales destinadas a canalizar o regular el diálogo entre tribunales”,²¹ dentro de las que se ubica el margen de apreciación.

6. Margen de apreciación

Según Núñez Poblete, el margen de apreciación

¹⁸ Rafael Bustos, “XV proposiciones generales para una teoría de los diálogos judiciales”, *op. cit.*, p. 31.

¹⁹ Argelia Queralt, *La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 71.

²⁰ Considerable parte de la doctrina identifica las sentencias del TEDH como una autoridad persuasiva y manifiestan que las autoridades nacionales siguen voluntariamente la jurisprudencia del TEDH sin que exista obligación jurídica ni en el CEDH ni en el derecho internacional, sino simplemente porque tienen temor de provocar una potencial sentencia europea estimatoria si la interpretación aplicada por la instancia nacional no se adecua a los estándares internacionales o porque el TEDH, dada su especificidad, tiene una presunción de corrección que facilita que las jurisdicciones internas la utilicen como precedente. Otros reconocen al TEDH como una autoridad interpretativa de carácter jurídico y defienden que puede reconocerse el carácter jurídico de la vinculación de las autoridades judiciales nacionales a la autoridad de *res interpretata* de las sentencias europeas en ciertos Estados en los que el CEDH ha sido incorporado. Una última línea doctrinal se inclina a reconocer carácter jurídico a la autoridad interpretativa de las sentencias del TEDH y admite una vinculación jurídica de los Estados parte no implicados en determinado proceso a la *Orientierungswirkung* derivada del CEDH; sostienen que existe obligación jurídica de seguir la jurisprudencia europea si esta es clara, precisa y reiterada (*ibid.*, pp. 71-78).

²¹ Bustos, *op. cit.*, p. 47.

... deja un margen de libertad a los Estados (i) para apreciar las circunstancias materiales que ameritan la aplicación de medidas excepcionales en situaciones de emergencia, (ii) para limitar el ejercicio de algunos de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales con el objeto de resguardar otros derechos o los intereses de la comunidad y (iii) para definir el contenido de los derechos y determinar el modo en que estos se desarrollan en el ordenamiento interno [...] (iv) para definir el sentido del derecho nacional y (v) para definir el modo en que se cumplirá una resolución de un órgano internacional de supervisión de un tratado.²²

Barbosa Delgado, luego de estudiar la manera como este es definido por diversos autores,²³ concluye que el margen de apreciación “debe ser comprendido como un reducto o criterio de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, atribuido al Estado por parte de los tribunales regionales. Su existencia se encuentra justificada por la ausencia de un consenso entre los diferentes Estados parte dentro de los tratados”.²⁴

De lo anteriormente consignado se colige que la idea toral del margen de apreciación es que los Estados cuentan con cierta discrecionalidad en el momento de aplicar y cumplir las obligaciones de carácter internacional que les son impuestas, y en la ponderación de intereses complejos. El margen de apreciación entraña deferencia del nivel supranacional hacia la decisión interna.

7. Precondiciones para implementar el margen de apreciación

Barbosa Delgado introduce un elemento necesario para hacer viable la utilización del margen de apreciación: la existencia de determinadas precondiciones.

²² Manuel Núñez, “Sobre la doctrina del margen de apreciación nacional. La experiencia latinoamericana confrontada y el *thelos* constitucional de una técnica de adjudicación del derecho internacional de los derechos humanos”, en Manuel Núñez y Paola Acosta Alvarado (coords.). *El margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 6.

²³ Barbosa indica que Arai Takahashi lo define como la posibilidad para el Gobierno de evaluar situaciones prácticas y, al mismo tiempo, de aplicar disposiciones inscritas en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. Explora también lo afirmado por Mahoney quien establece que doctrina es resultado natural entre la difusión y la aplicación estandarizada de valores de la Convención, y lo sostenido por Kastanas para quien el concepto es de geometría invariable y uno en el cual los contornos son definidos por la jurisprudencia que permite a los grandes órganos de Estrasburgo acordar una posibilidad convencional de apreciación de la legalidad interna por parte de las autoridades estatales (Francisco Barbosa Delgado, *El margen nacional de apreciación en el derecho internacional de los derechos humanos: entre el Estado de derecho y la sociedad democrática*, México, Biblioteca Jurídica Virtual – UNAM, 2012).

²⁴ *Ibid.*, p. 3.

La primera de ellas es que el Estado respecto al que se tenga la deferencia y se conceda la utilización del margen de apreciación debe ser necesariamente un Estado de derecho; además,

... el Estado a través de sus jueces debe aplicar adecuadamente la justicia para efecto que su margen de apreciación en torno a los derechos humanos se encuentre conforme a los estándares internacionales. En caso contrario, la inacción –impunidad– o la inaplicación inadecuada de la justicia frente a los ciudadanos conllevaría la reactivación de los mecanismos internacionales de derechos humanos, configurándose un desplazamiento de la función de decisión judicial.²⁵

La segunda precondition es la existencia de democracia en el seno del Estado respecto al cual se tendrá la deferencia. La democracia

... es entendida, entonces, como el espacio en el cual se respeta el pluralismo, la tolerancia de las personas, se acatan los derechos humanos, se desarrollan las relaciones de confianza con sus instituciones y se entiende la participación y la libre discusión, como factor esencial de legitimidad. Sin ella, los Estados no tendrían un margen nacional de apreciación conforme al derecho internacional de los derechos humanos.²⁶

En consecuencia, para que se concrete la posibilidad de utilizar el margen de apreciación como herramienta hermenéutica es imprescindible que el Estado cuya decisión va a ser respetada o apoyada sea un Estado de derecho y que ejerza su soberanía sobre individuos que se relacionen en el seno de una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa del pluralismo.

Además, el autor Andrew Legg afirma que en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados demandados, cuando aspiran a que se aplique el margen de apreciación en su favor, no tienen autoridad sobre los tribunales supranacionales para exigir su aplicación; en cambio, estos últimos sí tienen la autoridad para determinar la pertinencia de utilizar esa técnica de deferencia, pero para ello deben considerar la concurrencia de, al menos, uno de los siguientes factores: legitimidad democrática de la decisión estatal, falta de consenso entre los Estados respecto a la materia objeto de discusión y mayor especialización de autoridades estatales en el caso concreto. Esto se debe a que la deferencia hacia un Estado debe contar con una justificación lógica y no simplemente de carácter relacional entre el tribunal supranacional y el Estado.²⁷

²⁵ *Ibid.*, p. 19.

²⁶ *Ibid.*, p. 24.

²⁷ Andrew Legg, *The Margin of Appreciation in International Human Rights Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 17-19.

La legitimidad democrática de la decisión estatal gira en torno a la idea de que el Estado cuenta con un mandato democrático que lo faculta para decidir en materia de derechos humanos; en cuanto a la especialización de autoridades estatales en el hecho concreto puede darse el caso en que estas conozcan con mayor profundidad la temática que se esté discutiendo y, justamente por su posición privilegiada, resulte pertinente la aplicación del margen de apreciación.

Con relación a la falta de consenso, diversos autores la ubican como el factor primordial por considerar para la utilización del margen de apreciación; al respecto, Benavides Casals indica:

... la teoría del margen de apreciación nos indica en definitiva que allí donde no existe un mínimo común europeo para entender de una determinada manera el contenido de un derecho, se abre para el Estado un margen de acción que le permite fijar de acuerdo a circunstancias jurídicas, sociales y culturales el contenido y alcance de ciertos derechos, a la espera por parte del TEDH de poder encontrar elementos nuevos que le permitan establecer contenidos que se integrarán al orden público europeo y serán por tanto aplicables a todos los Estados miembros del Consejo de Europa por igual.²⁸

8. Viabilidad del margen de apreciación en la Corte IDH

El TEDH ha encarado el conflicto haciendo uso, en varios casos, del margen de apreciación,²⁹ situación que, a la postre, ha redundado en una protección de los derechos humanos respetuosa de la diversidad cultural y jurídica de los mismos; vale entonces analizar si esto sería factible de implementarse en la Corte IDH.

Para ello se deben analizar al menos dos aspectos: si existe compatibilidad para la incorporación del margen según los arreglos estructurales propios de la Corte IDH, y si la naturaleza de los casos que ese tribunal debe resolver amerita la utilización de ese mecanismo de deferencia.

Tal como se señaló, la Corte IDH incorpora jurisprudencialmente el control de convencionalidad, la *res iudicata* y la *res interpretata*; si bien dentro de los objetivos de estas herramientas jurisprudenciales está procurar la aplicación uniforme de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ello no resulta incompatible con la incorporación del margen de apreciación.

Tal como sucede con otras técnicas de deferencia, sería el propio tribunal supranacional el que determinaría la procedencia del margen de apreciación. De tal

²⁸ María Angélica Benavides, “El consenso y el margen de apreciación en la protección de los derechos humanos”, *Ius et Praxis*, año 15, núm. 1, 2009, p. 7.

²⁹ Por ejemplo, TEDH, Caso *Handyside vs. Gran Bretaña*, Sentencia de 7 de diciembre de 1976; TEDH, Caso *Wingrove vs. Reino Unido*, Sentencia de 25 de noviembre de 1996; TEDH, Caso *Vo vs. Francia*, Sentencia de 8 de julio de 2004.

cuenta, su incorporación no supondría un menoscabo a las competencias de aquella, ni una disminución de su rol como intérprete de la CADH, ni como creadora de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Con relación a la naturaleza de los asuntos que conoce la Corte IDH es dable afirmar que estos ya no son como anteriormente sucedía, casos de grandes violaciones de derechos humanos o cuestionamientos de los actos de poder y de decisión emanados de dictaduras donde no había sustento democrático; son más bien asuntos complejos donde puede haber controversia respecto al alcance, contenido e interpretación de los derechos fundamentales –cuestiones esencialmente controvertidas–.³⁰

9. Procedencia del margen de apreciación: desacuerdo razonable

Estimando lo plasmado en el apartado anterior, no pareciera existir impedimento concreto para la incorporación en la Corte IDH del margen de apreciación, por lo que resulta procedente analizar en qué casos se justificaría.

Una de las principales razones que daban sustento a la estructura poco dialógica de la Corte IDH era la naturaleza de los derechos que debía resolver el tribunal (grandes violaciones de derechos humanos); resulta sensato señalar que si ello se modifica, ante la aparición de desacuerdos razonables, podría también modificarse la aproximación en que la Corte IDH opera.

Respecto a los desacuerdos razonables, Juan Carlos Bayón consigna que son generados por “la relativa indeterminación de nuestras propias concepciones sobre el alcance de los derechos”.³¹ Rawls, por su parte, afirma que

... el desacuerdo razonable es un desacuerdo entre personas razonables; esto es, entre personas que han llevado a la práctica sus dos poderes morales en grado suficiente para ser ciudadanos libres e iguales en un régimen constitucional, y que tienen el deseo durable de honrar y acatar los términos justos de cooperación y de ser integrantes plenamente cooperadores de la sociedad

³⁰ Waldron indica que cuando se habla de un concepto esencialmente controvertido, no se limita a suponer que se está ante una noción cuyo significado es muy controversial, ni tampoco significa simplemente que este sea inextricable. *Esencialmente controvertido* indica, en primer término, que la discusión gira en torno al significado central del concepto; es una discusión acerca de diferentes visiones del significado esencial. En segundo lugar, expone que lo controvertido del concepto es parte de su esencia misma; es decir, se está ante un término cuyo significado es más propenso al desacuerdo que al consenso. Por último, un concepto esencialmente controvertido hace referencia a que el desacuerdo es, en determinados casos, indispensable en la aplicación del término (Jeremy Waldron, “Vagueness in law and language: Some philosophical issues”, *California Law Review*, vol. 82, 1994, pp. 529-530).

³¹ Juan Carlos Bayón, “El constitucionalismo en la esfera pública global”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, XXIX, 2013, p. 63.

[...] comparten la misma razón humana, así como semejantes poderes de pensamiento y de juicio: pueden hacer inferencias, ponderar las pruebas y equilibrar las consideraciones rivales.³²

Rawls identifica como causas o fuentes del desacuerdo razonable a las *cargas del juicio*. Como las más obvias expone: i) la evidencia que se presenta en el caso es conflictiva y compleja y por ende difícil de establecer y valorar; ii) aun cuando se está de acuerdo sobre las consideraciones relevantes para el caso, se puede disentir acerca de su importancia y así hacer diferentes juicios; iii) en cierta medida, todos los conceptos, no solo los morales y políticos, son vagos y están sujetos a casos difíciles (son conceptos esencialmente controvertidos); esta indeterminación significa que se debe atener a juicios e interpretaciones que están dentro de ciertos límites en que las personas razonables pueden diferir; iv) en alguna medida, la manera en que se aprecian y sopesan valores está condicionada por la experiencia, de ahí que en una sociedad moderna con distintos grupos sociales y variedad étnica, las experiencias de los ciudadanos son lo suficientemente dispares para que sus juicios sean divergentes; v) a menudo se presentan diferentes clases de consideraciones normativas y de diversa fuerza en ambos bandos de una disputa; vi) cualquier sistema de instituciones sociales está limitado en los valores que puede admitir, de manera que hay que hacer una selección de entre toda la gama de valores morales y políticos que podrían ser llevados a efecto.³³

La consecuencia de las *cargas del juicio* mencionadas es que no todas las personas razonables se rigen por la misma doctrina comprensiva razonable,³⁴ es decir, se pueden tener diferentes concepciones del mundo a partir de diversos puntos de vista, dado que la diversidad surge de las distintas perspectivas del sujeto. Consecuentemente, no sería razonable estimar que determinada doctrina comprensiva tenga mayor mérito que otras. En ese orden de ideas, Rawls consigna que

... las personas razonables se dan cuenta de que las cargas del juicio de valor establecen límites a lo que puede ser justificado razonablemente para los demás [...] Es irrazonable que nosotros utilicemos el poder político, en caso de tenerlo, o de compartirlo con otras personas, para reprimir puntos de vista comprensivos que no son irrazonables.³⁵

³² John Rawls, *Liberalismo político*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 72.

³³ *Ibid.*, pp. 73 y 74.

³⁴ Para Rawls, las doctrinas comprensivas razonables tienen tres características principales: en primer lugar, una doctrina razonable es un ejercicio de la razón teórica que abarca los más importantes aspectos religiosos, filosóficos y morales de la vida humana de manera consistente y coherente; en segundo lugar, organiza y caracteriza valores reconocidos para que sean compatibles unos con otros y expresen una concepción del mundo; y, en tercer lugar, cada doctrina hace esto en formas que la distinguen de otras, pero puede evolucionar lentamente a la luz de suficientes razones (*ibid.*, pp. 75 y 76).

³⁵ *Ibid.*, pp. 77-78.

Para la noción de desacuerdo razonable no basta tan solo que se tengan concepciones distintas del mundo y de las cargas valorativas por aplicar; es meritorio también la razonabilidad. Al respecto, Rawls señala que el pluralismo no es el hecho decisivo como tal sino el pluralismo razonable, como el resultado a largo plazo de los poderes de la razón humana dentro de un marco durable de instituciones libres, es decir, como el resultado del libre ejercicio de la razón humana en condiciones de libertad.³⁶

Si bien las cargas del juicio explican la existencia de desacuerdos entre personas razonables y por qué individuos capaces de cooperar bajo términos justos y que tienen una concepción racional del bien no llegan a los mismos juicios sobre asuntos religiosos, filosóficos o morales (existencia de diversas doctrinas comprensivas), para poder establecer el límite entre lo que se considera desacuerdos razonables y lo que no, se debe hacer uso del concepto de *razón pública*. Los desacuerdos razonables serían aquellos entre personas que ejercen una razón pública, es decir, razones que sean aceptadas por los demás miembros de la sociedad (razones compartidas). Estas razones compartidas, como se expone en *Liberalismo político*, son las basadas en una concepción política de la justicia sustentada en un consenso por superposición (*overlapping consensus*); lo que implicaría que ideas fundamentales sean compartidas por diferentes doctrinas comprensivas que se constituyen como una concepción política de la justicia, independientemente de las doctrinas comprensivas defendidas por los diferentes miembros de la sociedad. Entre estas ideas fundamentales se pueden encontrar los derechos y valores contenidos en las constituciones de los Estados y en los distintos tratados internacionales. En consecuencia, los desacuerdos serían, además de simples desacuerdos, razonables, si derivan de las interpretaciones plausibles de las ideas fundamentales que conforman el consenso por superposición.³⁷

10. Otra razón para la procedencia del margen de apreciación: legitimidad democrática

Además de la concurrencia de desacuerdos razonables para que sea procedente la utilización del margen de apreciación, la Corte IDH, al emitir sus pronunciamientos dentro de un caso concreto, debería verificar también la legitimidad democrática del ordenamiento jurídico estatal que sustenta el proceder del Estado que se cuestiona (en el caso de que el proceder del Estado tenga sustento normativo).³⁸

³⁶ *Ibid.*, p. 146.

³⁷ *Idem.*

³⁸ Sobre la legitimidad democrática de tribunales y cortes internacionales se ha escrito mucho. (Véase Richard Bellamy, “The democratic legitimacy of International Human Rights Conventions: Political constitutionalism and the European Convention on Human Rights”, *European Journal of International Law*, núm. 24, 2015; Armin von Bogdandy, “The democratic legitimacy of International Courts: A conceptual framework”, *Theoretical Inquires in Law*,

Según lo que consigna Gargarella al referirse al Caso Gelman vs. Uruguay (donde se verifican en el asunto subyacente desacuerdos razonables y legitimación democrática de la decisión del Estado), la legitimidad democrática de una norma está asociada al grado de inclusividad y debate público que haya rodeado a la misma al momento de ser dictada; por tanto, una norma producto de una dictadura típicamente gozaría de un grado más bajo de legitimidad debido a niveles de exclusión social presentes en la redacción y discusión de la misma.³⁹

El respeto a la legitimidad democrática parte de la idea de que toda comunidad tiene derecho de autodeterminarse y de definir los principios fundamentales que organizan sus instituciones básicas, “ello como resultado de asumir que, dentro de esa comunidad, ninguna autoridad resulta superior a la voluntad deliberada de sus propios miembros”.⁴⁰ La capacidad de determinada comunidad para decidir sobre sus propios asuntos debería incluir la posibilidad de que esta seleccione ciertos intereses fundamentales y los proteja de modo especial, mediante un diálogo colectivo, persistente en el tiempo, y abierto, con el objeto de refinar y precisar cuáles son esos intereses por proteger, cuáles sus contenidos específicos y cuáles sus entornos.⁴¹

Una discusión pública inclusiva y respetuosa de ciertas reglas procedimentales específicas da razones para considerar que de ese modo se maximiza la imparcialidad del resultado y se evitan ciertos sesgos indebidos. La noción de legitimidad democrática aquí reseñada no implica que toda expresión colectiva surgida del seno de una comunidad amerite una deferencia. Decisiones producto de altos niveles de exclusión, falta de información, obstrucción del debate público, restricciones a la libertad de expresión y similares, tendrían baja legitimidad democrática. Ante estas circunstancias, es natural que las decisiones de organismos internacionales ganen en autoridad y confiabilidad, pero “no ocurre lo mismo, en cambio, cuando la decisión que es objeto de análisis es producto de un proceso complejo, difícil, pero a la vez transparente, limpio y ampliamente participativo [...] frente a estas decisiones los tribunales internacionales deberían ser especialmente cuidadosos, respetuosos y deferentes”.⁴²

Por tanto, en clave del conflicto entre el ordenamiento jurídico de los Estados y las sentencias de la Corte IDH, si la decisión que sustenta el proceder del Estado deviene de un proceso deliberativo informado, inclusivo y transparente, se reducen las posibilidades de tomar decisiones en favor de determinados sujetos; entonces, y

núm. 20, 2013; sin embargo, para efectos del presente estudio, la noción de legitimidad democrática evoca el sustento democrático y el aspecto de la toma de decisiones transparentes y participativas dentro de los Estados.

³⁹ Roberto Gargarella, “Sin lugar para la soberanía popular. Democracia, derechos y castigo en el caso Gelman”, *Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política de la Universidad de Yale*, New Haven, Yale University Press, 2013, pp. 6-8.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 18.

⁴¹ *Idem.*

⁴² *Ibid.*, pp. 18-20.

si el caso lo hace meritorio por haber desacuerdo razonable, podría ser procedente la utilización del margen de apreciación.

Conclusiones

La incorporación del margen de apreciación en la Corte IDH no contraviene los arreglos estructurales actuales de ese tribunal puesto que podría configurarse como una herramienta jurisprudencial complementaria del control de convencionalidad y de la *res iudicata* y *res interpretata*. Incorporaría la posibilidad de que la Corte aludida desempeñara sus competencias respetando el pluralismo jurídico y cultural de los Estados sometidos a su jurisdicción.

En cuanto a la procedencia del margen de apreciación en la Corte IDH, esta debe atender a dos factores: en primer lugar, que se esté ante un caso donde, dado que se discuten cuestiones esencialmente controvertidas, se aprecie la concurrencia de desacuerdos razonables (entendidos como la concurrencia de aproximaciones divergentes respecto a la interpretación, los límites y los alcances de los derechos humanos). En segundo lugar, se debe estimar que la norma que sirve de sustento para el proceder del Estado cuenta con legitimidad democrática (derivada de un proceso deliberativo informado, inclusivo y transparente) pues, en caso contrario, no tendría sentido alguno diferir en favor de la aproximación del Estado.

La efectiva incorporación del margen de apreciación en la Corte IDH cuando está pendiente de emitirse sentencia contra el Estado parte, en el respectivo proceso internacional, podría hacerse efectiva mediante su inclusión en la sentencia misma. En este escenario, el margen de apreciación sería una herramienta de creación jurisprudencial incorporada con miras a respetar el pluralismo jurídico y cultural de los Estados cuando se está ante un caso que implica desacuerdos razonables y cuya decisión estatal cuenta con sustento democrático.

Distinto escenario con relación al mecanismo procedimental para incorporar el margen acontece cuando ya hay un pronunciamiento de la Corte IDH y la utilización del margen es invocada por un Estado distinto respecto al que se dictó dicha decisión, pero que, de cualquier manera, está vinculado por la sentencia. En este caso en particular se podría formular un nuevo mecanismo procedimental.

El mecanismo procedimental posible para el caso mencionado debería ser susceptible de solicitarse por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado cuando consideren que debe aplicarse el margen de apreciación; el proceso subyacente debería quedar en suspenso hasta que el tribunal supranacional emitiera su decisión; y sería la propia Corte IDH la que, tras determinar los antecedentes del caso y el pluralismo jurídico y cultural del solicitante, estableciera (ante la concurrencia de desacuerdo razonable y legitimidad democrática en la decisión estatal) la pertinencia de utilizar el margen de apreciación y apoyar la aproximación del Estado.

Muchas aristas y cuestionamientos podrían surgir de la incorporación del margen en la Corte IDH, y aun aceptando su pertinencia, se debe seguir profundizando en

adjudicación del derecho internacional de los derechos humanos”, en Manuel NÚÑEZ y Paola ACOSTA (coords.). *El margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

QUERALT, Argelia, *La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

RAWLS, John, *Liberalismo político*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

WALDRON, Jeremy, “Vagueness in law and language: Some philosophical issues”, *California Law Review*, vol. 82, 1994.